

El ciudadano Magistrado de Circuito lo decretó y firmó. Doy fé.—*Aurelio Rámis Portugal.*—*Ramon Reynoso.*

Es copia que certifico. Querétaro Abril 27 de 1875.—*Ramon Reynoso, secretario.*

Pedimento del C. Procurador General de la Nacion.

El Procurador General interino dice: que en la causa instruida á María Isabel Quiróz y Quirino Alcocer, por circulacion de moneda falsa, el Juzgado de Distrito de Guanajuato que la sustanció, pronunció sentencia en 23 de Febrero último, absolviendo del cargo á los acusados; y el Tribunal de Circuito de Querétaro confirmó este fallo por otro de 24 de Abril próximo pasado; el que siendo conforme, de toda conformidad con el de 1ª instancia, ha causado ejecutoria; por lo mismo, solo la revision del pro eso, en virtud de lo dispuesto y para los efectos que establece el artículo 34 de la ley de 14 de Febrero de 1826:

El que suscribe, ha examinado la causa referida, así como las sentencias que en ella recayeron, y no encontrando mérito para exigir la responsabilidad, pide á la Sala se sirva declararlo así, mandando archivar el Toca y remitir las actuaciones originales al Tribunal de su procedencia México, Mayo 8 de 1875.—*Lozano.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 15 de 1875.

Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvase las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velasquez.*—*Simon Guzman.*—*Luis María Aguilar, secretario.*

Es copia. México, Mayo 26 de 1875.—*Gómez Eguiarte, oficial segundo.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por el C. Lic. Francisco Guzman en representacion del C. Juan Bustamante, contra los procedimientos del C. Juez de 1ª instancia del Partido de Catorce, por violacion de garantías.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito del Estado.

El Promotor dice: que el C. Lic. Francisco Guzman, como apoderado de D. Juan Bustamante residente en la capital de la República; solicita amparo de la justicia federal, contra los procedimientos del Juez de 1ª Instancia del Partido de Catorce, en el juicio hipotecario que conforme al Código de procedimientos civiles, sigue en su contra D. Miguel Baigen, por pago de la cantidad de ocho mil pesos que su esposa Dª Dolores Huerta de Baigen, facilitó al mismo Sr. Bustamante en 1868, bajo hipoteca otorgada en esta fecha sobre la Hacienda del Salado. Cree violadas con semejantes procedimientos en la persona de su representado, las garantías otorgadas en el art. 14 de la Constitucion de la República, y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869 solicita el amparo de la Justicia de la Union.

Pedido á aquella autoridad el informe respectivo que previene la ley, con relacion al curso intentado, por su amplia y minuciosa manifestacion de los hechos que han tenido lugar relativamente al juicio hipotecario, se ve claramente comprobado que en la sustanciacion de aquel juicio no solo ha habido la mas perfecta y explícita conformidad de las personas representantes del Sr. Bustamante entre ellas y lo conducente al Sr. Lic. Guzman, sino que esos mismos procedimientos, iniciados desde un principio, segun la nueva legislacion, han sido consentidos y auxiliados por los mismos re-

presentantes del demandado, y por eso se vó que desde la citacion para contestar la demanda hasta la publicacion del último pregon, expedido con calidad de remate para el 22 del mes pasado, no habia hecho observacion, y antes bien despues de no haberse opuesto á escpcion alguna, fué consentida aún la sentencia de remate, despues de valorizar el rancho de Sn. Pablo, y practicadas las demas diligencias subsecuentes á fijar su precio, que como base se habia adoptado y se anunció al público para su venta judicial. En consecuencia, sin observar en manera alguna el tratamiento dado al procedimiento hipotecario, y renunciadas cuantas escpciones podian haber favorecido al demandado, no ha podido legalmente pretenderse á última hora, recurso alguno legítimo que venga á echar por tierra cuanto en aquel juicio se ha practicado, sea que el procedimiento haya debido arreglarse al derecho antiguo ó al novísimo, y aceptado una vez cualquiera de ellos, nada puede destruirlo mediante aquella conformidad.

Ademas, segun tiene manifestado el Ministerio en asuntos anteriores de igual naturaleza, en materia de procedimientos, no cree que pueda alegarse retroactividad, ni menos cuando conforme el art. 1º de la ley transitoria de aquel Código, terminantemente espresa, que la sustanciacion de los negocios pendientes se sujetará en el estado que se encuentren para el dia de su publicación y en cuanto tambien por otra parte segun su art. 18, quedan derogadas todas las leyes de procedimientos civiles que hasta aquella fecha se hubiesen promulgado; de que se deduce que, determinándose por aquella ley que dichos procedimientos en lo sucesivo, habian de quedar sujetos á lo que ella prescribe, es el caso en que no cabe la retroactividad, y deben por lo mismo arreglarse conforme á ellas todos los actos consiguientes á su dicha sustanciacion.

El art. 14 de la Constitucion General dice: que nadie puede ser juzgado ni sen-

tenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y esactamente aplicadas á él; y como juzgar en sentido jurídico no es otra cosa sino pronunciar sentencia, cuando áquel art. manifiesta que nadie puede ser juzgado, no se refiere á la sustanciacion del procedimiento, sino á la resolución definitiva del juicio; esto es á la misma sentencia, que bien puede y debe dictarse, conforme al tratamiento ó sustanciacion legal que corresponde; y en esta virtud, siendo que la ley transitoria de que se ha hecho mérito; dispone, que la sustanciacion de los negocios pendientes se sujete á las prescripciones que ella determina, así como que la misma parte que promueve, ha estado conforme en su aplicacion, lo que supone su consentimiento en el modo de juzgar á su representado, es inconcuso, que no ha habido violacion de las garantías de que se queja, y no cabe el amparo que se solicita.

Así opina el Ministerio; ese Juzgado, sin embargo, decretará lo mas conforme á la Justicia.

San Luis Potosí, Agosto 1º de 1874.
—Gregorio Vasquez.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Luis Potosí, Diciembre 10 de 1874.

Visto este juicio de amparo promovido por el C. Lic. Francisco Guzman, en representacion jurídica del C. Juan Bustamante, contra los procedimientos seguidos por el C. Juez de 1ª instancia del Partido de Catorce, que reside en Matehuala, en la demanda que promovió al segundo D. Miguel Baigen en nombre de su señora Dª Dolores Huerta, por la cantidad de ocho mil pesos, y sus réditos que recibió de esta á deposito irregular por cinco años, segun aparece de la escritura hipotecaria de 19 de Octubre de 1863, conceptuando que con esos procedimientos se vulnera en la

persona de su poderdante la garantía que asegura el art. 14 de la Constitución, y funda la queja en la frac. 1ª del art. 19 de la ley de 20 de Enero de 1869; visto el escrito de queja, el informe con justificación de la autoridad responsable, los autos originales del juicio hipotecario que aquel acompañó, el pedimento fiscal contrario á la cosección del amparo solicitado, el alegato del quejoso, la citación para la sentencia y lo demás que consta en autos, se tuvo presente y verconvino: y

Considerando 1º: Que aunque se ha tratado de sostener como lo hace el C. Promotor fiscal, que no cabe el amparo á no es admisible en negocios judiciales, porque el es una rémora á la pronta administración de justicia; viene á multiplicar los recursos ya superabundantes que otorgan las leyes á los litigantes en los mismos juicios, se ha declarado, en vista de la prescripción general y absoluta del art. 101 frac. 1ª de la Carta fundamental que no exceptúa, cuando pudo hacerlo á los negocios judiciales; que procede el amparo respecto de ellos siempre que de cualquier modo se violen por los Jueces ó tribunales, las garantías individuales, siendo la razón entre otras que ellas constituyen la base y el objeto de las instituciones sociales, que están obligadas á sostener todas las autoridades; de tal suerte, que ponerse una limitación á aquel precepto por un Juez federal, sería cometer una arbitrariedad, un atentado, un exceso de poder, fuera de que el amparo es un medio de reparar violentamente la violación de una garantía, condición que no llenan los recursos ordinarios.

Considerando 2º: Que consta de autos que la escritura de hipoteca origen de este recurso fué otorgada en esta Capital á 19 de Octubre de 1863 por ante el escribano D. Ignacio Lopez Portillo, ó sea con anterioridad á la promulgación del Código de procedimientos civiles en el Estado, que comenzó á regir, desde 1º de Abril del año próximo pasado, con lo que resulta eviden-

temente demostrado que el procedimiento hipotecario novísimo, adoptado por el C. Juez de 1ª instancia del Partido de Catorce, ha sido aplicado en el caso á un contrato anterior de diez años á la vigencia de ese Código.

Considerando 3º: Que para resolver si la aplicación de ese Código al contrato de hipoteca celebrado en 19 de Octubre de 1863, produce el efecto retroactivo que prohíbe el art. 14 de la Constitución, y por consiguiente la violación de la garantía invocada por la parte de Bustamante, á examinarse si ha podido aplicarse el novísimo procedimiento hipotecario desconocido en la legislación precedente ó intimamente ligado con el Código Civil.

Considerando 4º. Que aunque atendiendo á la conformidad del apoderado en el juicio hipotecario, con la adopción de este procedimiento, pudiera decirse que no hay violación de la garantía invocada, sobre todo si se atiende á que la de la cédula hipotecaria sobre la Hacienda del Salado, afecta al pago de la cantidad demandada, no pasó del embargo tal cual lo establecieron las leyes antiguas, no se limitó la libertad y amplitud de defensa á la parte del ejecutado, porque explícitamente declaró que no tenía excepciones que oponer, ni tampoco se llegó al caso de la retasa ó retasas de los bienes embargados, porque el ejecutante se conformó y pidió la adjudicación en pago de esos bienes, en los dos tercios del avalúo en defecto de postores; sin embargo, aunque no se percibe perjuicio que reporte el ejecutado con ese procedimiento hipotecario, basta que la conformidad del ejecutado no conste de la manera formal y solemne que previenen los artículos 910 á 912 del Código de procedimientos civiles, y que la sustanciación del juicio hipotecario esté intimamente ligada con el nuevo Código civil, para deducir la violación del artículo 14 de la Constitución, que garantiza, que nadie sea juzgado por leyes dadas con posterioridad al hecho de que se trata;

de manera que, siendo un derecho adquirido por Bustamante que se le juzgue, esto es, que se proceda en su contra por la acción nacida del referido contrato, como estaba previsto por las leyes vigentes á la fecha de su celebracion; el no haberse verificado así, importa violacion del art. 14 mencionado, porque tambien en materia de procedimientos está prohibida la retroactividad, segun lo fundan en su estudio relativo el C. Lic. Isidro A. Montiel y Duarte, y mas si se atiende á que se viene á aplicar á la vez el Código civil, ó sea la ley que no regia al nacimiento del contrato en cuestion.

Por lo espuesto, debia declarar y declarar: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Juan Bustamante, contra los procedimientos adoptados por el C. Juez de 1ª Instancia del Partido de Catorce, que reside en Matehuala, para exigirle el pago de los ocho mil pesos y sus réditos de que aparece deudor por la escritura de 19 de Octubre de 1863, por violarse con ellos la garantía que reconoce el art. 14 constitucional.

Devuélvanse los autos originales del juicio hipotecario al C. Juez mencionado, despues de sacarse testimonio en forma de los mismos.

Hágase saber, publíquese y elévense estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Lo decretó y firmó en definitiva el C. Juez del Estado.—Doy fé.—*Conrado Diaz Soto.*—*Donaciano Monroy*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 15 de 1875

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por el ciudadano Licenciado Francisco Guzman, en representacion jurídica del ciudadano Juan Bustamante, contra los procedimientos del ciudadano Juez de primera instancia del Partido de Catorce, que resi-

TOMO VII—PARTE II.

de en Matehuala, en el juicio que lo promovió D. Miguel Baigen, en nombre de su esposa D^a Dolores Huerta, por la cantidad de ocho mil pesos, que recibió de esta, á depósito irregular por cinco años, segun aparece de la Escritura otorgada en 19 de Octubre de 1863; alegando el quejoso, que con esos procedimientos se viola en la persona de su poderdante la garantía que otorga el artículo 14 de la Constitucion general de la República. Vista la sentencia del Juez de Distrito, el pedimento fiscal y las demás constancias que obran en el expediente respectivo, y

Considerando: que de autos consta: 1º la manifestacion hecha por la parte del C. Bustamante de que no tenia excepcion alguna que oponer en el juicio. 2º Que el embargo se verificó en parte de los bienes especialmente hipotecados para el pago de la cantidad adeudada. 3º Que por falta de postores se adjudicó el rancho de San Pablo al actor en las dos terceras partes del precio. 4º Que la parte del ciudadano Bustamante estuvo conforme con todos los procedimientos del juicio hasta la publicacion del último pregon, y 5º Que con todos estos procedimientos no se han perjudicado en manera alguna los derechos anteriormente adquiridos por el ciudadano Bustamante, único caso en que podria alegar que se habia violado en su contra la garantía invocada.

Por tales razones y con fundamento de lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta:

1º Que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito de San Luis Potosí, pronunciada en diez de Diciembre del año próximo pasado, que amparó al quejoso.

2º La Justicia de la Union no ampara ni protege al ciudadano Juan Bustamante, contra los procedimientos del ciudadano Juez de primera instancia del partido de Catorce en Matehuala; en el juicio seguido contra dicho Bustamante por la parte de la

84

Señora D^a Dolores Huerta de Baigen sobre pago de ocho mil pesos y sus réditos.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—CC. Presidente.—*José María Iglesias.*—Ministros.—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*E. Montes.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, oficial mayor.

Es copia que certifico. México, Mayo 24 de 1875.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Colima contra Adelaida López y Octaviana Morán, por circulación de moneda falsa.

Pedimento del C. Promotor Fiscal.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que la formación de la causa por circulación de moneda falsa contra Adelaida López y Octaviana Morán, la motivó la consignación hecha el día tres del corriente por la Prefectura política, de dicha López, acompañando como cuerpo del delito, tres pesos fuertes, una peseta y un real que corren diseñados en la foja tercera. Practicada la averiguación consiguiente, aparece de ella, que D^a Amada Madrigal, á prima noche del día 2 del corriente, solicitó de la policía la aprehensión de la referida López, por haber advertido hasta esa noche,

que por tercera vez le compraba en su tienda efectos con moneda falsa, porque mandó reconocer el tercer peso que llevó, y que fué calificado de falso, como lo expuso en su declaración, exhibiendo los tres pesos, y mas una peseta y un real también falsos, suponiendo que la misma López los había empleado en su tienda.

La referida reco López en su preparatoria conviene en haber ido la noche del citado día dos á la tienda de la quejosa á comprar pan y vela con un peso fuerte, que le dió para el efecto la madre Octaviana Morán; mas no lo reconoció entre los presentados, y negó haber ido en noches anteriores á gastar pesos fuertes al mismo comercio, negando también el que hubiera llevado la peseta y real de los presentados y diseñados, exponiendo por último, que tal peso procedía de diez y ocho reales que le habían pagado á la madre, en el almacén de D. Julio Griket, donde está sirviendo. Dos peritos reconocieron las monedas, y unánimemente convienen en que son falsas, y que están galvanizadas de plata.

Presentada Octaviana Morán, en su preparatoria expuso, que sirviendo de molendera en la casa y almacén de D. Julio Griket, la tarde del día dos del corriente, Pablo el mozo de la misma casa le pagó dos pesos duros y una peseta por el lavado de unas mantas, cuyo dinero tomó sin registrarlo, y en la noche del mismo día, le dió á su hija Adelaida López uno de ellos sin verlo, para que comprase vela, y á ello fué á la tienda inmediata de la Madrigal; pero á poco avisaron que se llevaban presa á su citada hija; por último dijo, que hacía quince días que no le había dado á esta algún peso duro para el gasto. Evacuada la cita de Pablo, mozo del almacén, declaró de conformidad en cuanto al lavado de las mantas y al pago de los dos pesos y á la peseta; pero agregó que aquellos eran carones, lizos y del cuño antiguo.

Evacuadas todas las citas que resultaron y carcos correspondientes, tales diligencias